



## Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr. general  
12 de septiembre de 2014  
Español  
Original: francés

### Comité de Derechos Humanos

#### 112º período de sesiones

7 a 31 de octubre de 2014

Tema 5 del programa provisional

**Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto**

### Lista de cuestiones relativa al informe inicial de Haití

#### Adición

#### Respuestas de Haití a la lista de cuestiones\*

[Fecha de recepción: 7 de agosto de 2014]

1. La República de Haití presentó su informe inicial al Comité de Derechos Humanos el 30 de noviembre de 2012, de acuerdo con el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité aprobó una lista de cuestiones (CCPR/C/HTI/Q/1) en su 110º período de sesiones para ayudar a la delegación haitiana a preparar el examen de su informe. Se pidió a Haití que presentara sus respuestas, a más tardar, el 8 de agosto de 2014. Una sección del Comité Interministerial de Derechos Humanos recabó la información necesaria de las instituciones competentes en los temas en cuestión y propuso un proyecto de respuesta que fue validado tras tener en cuenta la reacción del sector público y de la sociedad civil.

#### Marco constitucional y jurídico de la aplicación del Pacto, derecho a un recurso efectivo (art. 2)

2. El Pacto prevalece sobre las leyes en virtud del artículo 276-2 de la Constitución, que dispone lo siguiente: "Los tratados o acuerdos internacionales, una vez sancionados y ratificados en las formas previstas en la Constitución, forman parte de la legislación del país y derogan todas las leyes contrarias a ellos". Cabe destacar que se hicieron valer las disposiciones del Pacto en el llamado proceso de "La Scierie", en el que estuvieron implicados un antiguo Primer Ministro, dos antiguos Ministros y un antiguo Director General de la Policía. Estas personas habían permanecido en prisión preventiva en espera de juicio durante un período que excedía los plazos legales. Recurrieron su prolongada

\* El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.



detención preventiva haciendo valer, entre otras leyes, las disposiciones del Pacto y se dio lugar a sus recursos.

3. Después de que el 20 de julio de 2012 se publicara en el *Boletín Oficial* la Ley Orgánica de la Oficina del Defensor del Pueblo, y tras una moción del Parlamento, el presupuesto de la Oficina del Defensor del Pueblo pasó de 21 millones a 32 millones de gourdes, lo que permitió a la institución crear una Dirección de Presencia Territorial y contratar a 20 nuevos funcionarios repartidos por todos los departamentos geográficos del país, garantizando así su presencia en todo el territorio nacional. En el ejercicio de su cometido, estos funcionarios prestan especial atención a las condiciones generales de detención y, en particular, a las garantías judiciales.

4. En el año 2013, a raíz de las denuncias recibidas, las instituciones a que se referían pusieron en práctica 2.574 recomendaciones de la Oficina del Defensor del Pueblo. Se trataba de quejas relativas al derecho a unas condiciones de trabajo justas (despidos, salarios y atrasos salariales), la negativa de la administración a cumplir resoluciones judiciales, el derecho a un juicio imparcial y a un recurso efectivo, el derecho a la libertad y seguridad personales y otros problemas vinculados al acceso a los servicios públicos, así como a transgresiones del principio de presunción de inocencia. En la mayoría de casos se ha dado respuesta, especialmente en cuestiones relativas a las garantías judiciales y los atentados contra la integridad física, que implican sobre todo a los agentes de la Policía Nacional de Haití. Quienes se benefician con más frecuencia en estos casos son detenidos, personas deportadas de los Estados Unidos de América y del Canadá, funcionarios y personal judicial.

5. Al mismo tiempo, algunos de los sectores que han sido objeto de recomendaciones oficiales han adoptado medidas para resolver los problemas señalados, como, por ejemplo:

- El inicio del proceso de transferencia de competencias del Ministerio de Justicia al Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ), la instauración en todas las jurisdicciones de tribunales de primera instancia para el procedimiento de comparecencia inmediata y la celebración de vistas penales especiales;
- La anulación del período bajo vigilancia al que están sometidos los repatriados por la fuerza, el aumento progresivo del presupuesto de la Oficina del Defensor del Pueblo, la anulación de la circular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en que se ordenaba a los jueces recabar autorización del Ministerio de Justicia antes de abrir una causa judicial contra un agente de policía y el inicio de estudios sistemáticos sobre el movimiento del personal judicial por parte del Consejo Superior del Poder Judicial;
- La creación de una comisión de revisión encargada de reexaminar los expedientes de los policías cesados en el marco de los procesos de certificación, una mayor atención a la recomendaciones de la Oficina del Defensor del Pueblo por parte de la Policía Nacional siguiendo el espíritu del artículo 7.12 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Policía Nacional de Haití, la institucionalización del Comité Interministerial de Derechos Humanos y la constitución de comités de seguimiento del proceso penal en los tribunales de primera instancia de todas las jurisdicciones.

6. Desde el punto de vista normativo, se ha dado respuesta fundamentalmente a las cuestiones relativas a la aprobación o la publicación de los textos legales de acuerdo con las normas internacionales: la publicación del decreto de ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la ratificación de los Protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño; la aprobación de la nueva Ley Reguladora de la Adopción en Haití; la elaboración de un anteproyecto de código de protección del menor; la aprobación y promulgación de la Ley de Lucha contra la Trata de Personas; la aprobación y promulgación de la Ley de Prevención y Represión de la Corrupción y la

aprobación de la Ley de Paternidad, Maternidad y Filiación; el Parlamento examina un proyecto de ley-marco sobre las instituciones independientes tras las conversaciones que ha mantenido la Oficina del Defensor del Pueblo con los responsables de las demás instituciones independientes, y la firma de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otras.

7. Desde que volviera del exilio Jean-Claude Duvalier el 16 de enero de 2011, varias personas que afirman haber sido víctimas de su régimen han presentado denuncias. Se designó a un juez de instrucción para que dirigiera la investigación judicial, el cual dictó el 27 de enero de 2012 el siguiente auto:

"POR ESTOS MOTIVOS, desestimamos el requerimiento de encausamiento definitivo del Comisionado designado por el Gobierno; nosotros [...] afirmamos que existen indicios graves y concordantes para remitir al Sr. Jean-Claude Duvalier al Tribunal Penal a fin de que sea juzgado por el delito de malversación de caudales públicos, y declaramos que ha lugar a su procesamiento, por lo que lo remitimos al Tribunal Penal para que sea juzgado con arreglo a lo dispuesto en los artículos 117 y 118 del Código de Procedimiento Penal. Por consiguiente, ordenamos que se transmitan todas las piezas del expediente examinado en el presente auto al Comisionado designado por el Gobierno a los efectos previstos en derecho."

8. Este auto fue recurrido tanto por el propio acusado como por los denunciantes, que interpusieron recurso los días 15, 16 y 17 de febrero de 2012. El 20 de febrero de 2014, el Tribunal de Apelaciones de Puerto Príncipe dictó la siguiente resolución interlocutoria:

"Por estos motivos, después de haber deliberado con arreglo a la ley, en sesión reservada, y oído el fiscal, el Tribunal recibe en forma el recurso del acusado Jean-Claude Duvalier de fecha 23 de febrero de 2012 y el de los demandantes y partes civiles en el caso [...] interpuesto por escrito ante el secretario del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, respectivamente los días 15, 16 y 17 de febrero de 2012; en cambio, declara inadmisibile el de [...] por no haber sido interpuesto dentro del plazo legal;

- Afirma que era contrario a derecho y que procedía el recurso;
- Anula el auto recurrido; reconoce que la noción de delito de lesa humanidad forma parte de la costumbre internacional y que la costumbre internacional forma parte del derecho interno de Haití;
- Afirma y declara que los actos imputados al Sr. Jean-Claude Duvalier constituyen delitos de lesa humanidad y son, por su carácter continuo, imprescriptibles y que las disposiciones de los artículos 464, 465 y 466 del Código de Procedimiento Penal, invocados por el acusado, Sr. Jean-Claude Duvalier, no son aplicables en el caso de autos;
- Considera evidentes varios indicios graves de la participación indirecta y la responsabilidad penal del acusado, Sr. Jean-Claude Duvalier, por haberse abstenido de tomar las medidas necesarias y razonables para impedir la comisión de los delitos y castigar a los responsables;
- Rechaza por ser infundada la excepción derivada del principio de litispendencia planteada por el acusado, Sr. Jean-Claude Duvalier; rechaza las observaciones de la parte acusada relativas al expediente de la Fiscalía que se encuentra en el Tribunal de Casación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99, apartados 4 y 5, del Decreto de 22 de agosto de 1995 de Organización Judicial;

- Afirma que, en relación con los demandantes que se personaron debidamente en el caso y que no fueron oídos por el juez de instrucción, los acusados que pueden inscribirse en la categoría "y consortes", los acusados fallecidos y los posibles testigos mencionados por los demandantes en sus testimonios ante el Tribunal, resulta necesaria disponer de más información por la vía de:
  - 1) La audiencia de todos los demandantes que no fueron oídos por el juez de instrucción y que se personaron en el caso mediante demandas formales presentadas ante la Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe y trasladadas al juez de instrucción con los requerimientos de encausamiento supletorios;
  - 2) La citación y el interrogatorio de todos los acusados citados en los requerimientos de encausamiento de la Fiscalía de fecha 20 de abril de 2008 y 18 de enero de 2011, la identificación de quienes se inscriben en la categoría "y consortes" y la aclaración de la situación de los acusados fallecidos;
  - 3) La audiencia, en calidad de testigo, de todos los ciudadanos citados por los demandantes en sus testimonios ante el Tribunal, la realización de todas las diligencias de instrucción que fueran especialmente necesarias y la identificación de los demás posibles testigos a la luz de la nueva información;
- Ordena, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de 26 de julio de 1979 de Apelación Penal, una instrucción suplementaria. A tal efecto, designa, dentro del plazo legal, al Juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Príncipe."

9. El 7 de marzo de 2014, uno de los abogados del Sr. Jean-Claude Duvalier presentó recurso de casación contra la resolución interlocutoria del Tribunal de Apelación de Puerto Príncipe de fecha jueves 20 de febrero de 2014. Ese mismo día por la tarde, en un evento dirigido al secretario del Tribunal de Apelaciones de Puerto Príncipe, el Sr. Jean-Claude Duvalier presentó una petición de remisión a otro tribunal de apelaciones por albergar sospechas legítimas en los términos del artículo 429 del Código de Procedimiento Penal. El 14 de marzo de 2014, los abogados del Sr. Duvalier trasladaron a las partes copia de la solicitud del 10 de marzo del año en curso, dirigida al Presidente y a los Magistrados del Tribunal de Casación de la República, en la que figuraban los medios de la inhibitoria y del recurso de casación.

10. El Gobierno de Haití respeta los principios del estado de derecho, por lo que no interviene ni en un sentido ni en el otro en esta causa y deja que la justicia siga su curso. Una intervención inoportuna constituiría no solo una vulneración de dicho principio sino también del derecho del Sr. Duvalier a un juicio imparcial.

11. Mediante Decreto del 28 de marzo de 1995, se creó una "Comisión Nacional de la Verdad y la Justicia", compuesta de siete miembros, con el cometido enunciado en el artículo 2 de dicho Decreto: "determinar globalmente la verdad en torno a las violaciones más graves de los derechos humanos cometidas entre el 29 de septiembre de 1991 y el 15 de octubre de 1994 dentro y [...] del país y contribuir a la reconciliación de todos los haitianos, sin perjuicio de los recursos judiciales que pudieren proceder por dichas violaciones".

12. En el ejercicio de su mandato, la Comisión ha recibido más de 5.500 testimonios, ha identificado a 8.667 víctimas y ha catalogado 18.629 casos de violaciones de los derechos humanos. La Comisión ha abierto investigaciones específicas de los casos de violencia sexual contra mujeres y de abusos de periodistas, así como de la masacre de Raboteau de abril de 1994.

13. En su informe final, la Comisión presentó una lista con los nombres de las personas acusadas de haber cometido actos que vulneran los derechos humanos en ese período y recomendó a las autoridades judiciales que abrieran las correspondientes investigaciones y condenaran a los responsables. La Comisión recomendó asimismo la creación de otra comisión que se ocupara de las reparaciones, la reforma del sistema judicial y la aprobación de nuevas leyes contra la violencia de género, en general, y las violaciones, en particular.

14. Con arreglo a las recomendaciones del informe se abrieron varias causas, entre las cuales destaca especialmente la causa Raboteau, cerrada en el año 2000 después de juzgar a 59 personas, entre ellas al alto mando militar y a los principales líderes del grupo paramilitar Frente Revolucionario para el Adelanto y el Progreso de Haití (FRAPH). De estas 59 personas, 37 fueron juzgadas en rebeldía y el jurado condenó a 16 de los 22 presentes por su participación en la masacre. Las penas de prisión impuestas iban de cuatro a nueve años (4 personas) e incluso a la cadena perpetua (12 personas). El tribunal reconoció el derecho de las víctimas a obtener una reparación, pero no hay constancia de pagos en dinero a las víctimas. Todas las personas juzgadas en rebeldía fueron condenadas a trabajos forzados perpetuos; sin embargo, una sentencia del Tribunal de Casación anuló el fallo por incompetencia del tribunal que lo había dictado.

15. El Comité Interministerial de Derechos Humanos, creado por Decreto de fecha 26 de abril de 2013, tiene encomendadas la coordinación y armonización de las políticas públicas en materia de derechos humanos. El Comité está integrado por:

- La Viceprimera Ministra Encargada de los Derechos Humanos y la Lucha Contra la Pobreza Extrema, que lo preside;
- El Ministro de Asuntos Exteriores;
- El Ministro de Justicia y Seguridad Pública;
- El Ministro del Interior y de Gobierno Local
- El Ministro de Asuntos Sociales y de Trabajo;
- El Ministro de la Condición Femenina y los Derechos de la Mujer;
- El Ministro de Salud Pública y Población;
- El Ministro de Cultura;
- El Ministro de Educación Nacional y Formación Profesional.

16. Se constituyeron tres subcomités en el seno del Comité Interministerial mediante la reagrupación de las instituciones públicas competentes y en función de los derechos que debían examinarse. Otros dos subcomités intervienen en la ejecución de las actuaciones previstas. Los tres subcomités constituidos en función de los derechos son:

- **El Subcomité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales**, cuyos ámbitos de acción son los derechos de las personas mayores, las personas con discapacidad, los niños y las mujeres y el derecho al trabajo, a una vivienda digna, a la salud, a la educación y a la alimentación. En el seno de este subcomité se encuentra la Unidad de Valorización y Promoción Cultural, que se ocupa de los derechos lingüísticos, los derechos de autor y la libertad de conciencia, de religión, de información y de esparcimiento.
- **El Subcomité para la Protección del Medio Ambiente**, cuyos ámbitos de acción son el acceso al agua, el derecho al uso colectivo y equitativo de los recursos naturales, la promoción de la higiene pública, el acondicionamiento de las cuencas hidrográficas y la protección de la biodiversidad;

- **El Subcomité de Justicia y Seguridad Pública**, cuyos ámbitos de acción son el derecho a la libertad de reunión y asociación; los derechos de las personas privadas de libertad; el derecho a la seguridad; el derecho a un juicio imparcial y el acceso a la justicia (justicia de proximidad, costo mínimo, lengua comprensible, etc.).

17. La Oficina de la Viceprimera Ministra Encargada de los Derechos Humanos y la Lucha Contra la Pobreza Extrema trabaja activamente en la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos. En junio de 2014, se sometió un primer borrador a la aprobación de los miembros del Comité Interministerial.

18. En el marco de la preparación del documento, se ha previsto un conjunto de actividades tales como una campaña de promoción por todo el territorio, su presentación a las organizaciones de la sociedad civil y la organización de talleres de validación, entre otras. Los comentarios y las sugerencias recibidas permitirán que el Comité Interministerial, asistido por consultores, ultime el Plan. El documento final será presentado al Presidente de la República y al Primer Ministro. En este Plan, se prevé "un programa de educación en derechos humanos".

#### **No discriminación e igualdad de derechos entre hombres y mujeres (arts. 2, 3, 23 y 26)**

19. Todavía no se dispone de datos estadísticos globales sobre la aplicación de la cuota del 30% de mujeres en todas las instancias de la administración pública desde que entró en vigor. Sin embargo, según la información recabada en diferentes instituciones, se han hecho grandes avances al respecto. Así, en la administración de la Presidencia, de los 17 cargos de responsabilidad las mujeres ocupan 10, es decir, el 58%. El Estado ha creado un comité multisectorial que vela por la aplicación de las obligaciones constitucionales en lo concerniente a la cuota mínima del 30% de mujeres en la administración pública.

20. Asimismo, el 2 de diciembre de 2013, el Parlamento creó una Oficina para la Igualdad entre los Géneros, cuyo objetivo es velar por que todas las leyes votadas por el Parlamento tengan en cuenta la cuestión. La Oficina servirá igualmente de plataforma para fomentar el diálogo entre el Parlamento, las asociaciones feministas y la sociedad civil. Se encargará además de vigilar la aplicación de la cuota del 30% de mujeres en la administración pública.

21. El Ministerio de la Condición Femenina y los Derechos de la Mujer trabaja para ultimar una política de igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. En este sentido, el 7 de agosto de 2013, el Consejo de Ministros aprobó la convocatoria del Foro de Directores Generales para debatir, entre otros asuntos, la política gubernamental en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

22. Con el fin de combatir la discriminación de género, el Ministerio de Salud Pública y Población ha puesto en marcha diferentes programas que tienen en cuenta las necesidades específicas en razón del sexo; así, se ha reforzado la vacunación ordinaria de las mujeres embarazadas y de las mujeres en edad de procrear y se han introducido consultas prenatales gratuitas en las instituciones de salud públicas. También se ha sensibilizado al personal de los diferentes departamentos de salud en cuestiones de igualdad de género.

23. Asimismo, el Ministerio de la Condición Femenina y los Derechos de la Mujer ha organizado una campaña para dar a conocer los estereotipos en los libros de texto, en colaboración con el Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional y las editoriales. En abril de 2013 entró en funcionamiento una Dirección de Asuntos Jurídicos en el Ministerio de la Condición Femenina y los Derechos de la Mujer, encargada, por una parte, de acompañar a las mujeres víctimas de formas específicas de violencia y, por la otra de revisar las leyes y los textos discriminatorios, así como vigilar la aplicación de los tratados y las convenciones en materia de derechos de la mujer.

24. En junio de 2014 se promulgó la Ley de Paternidad, Maternidad y Filiación, que refuerza en el plano jurídico el principio de igualdad de todos los niños nacidos o no dentro de matrimonio, e introduce una innovación al autorizar la investigación de la paternidad o la maternidad, hasta entonces prohibida.

25. En 2007 se creó la Oficina del Secretario de Estado de Integración de las Personas con Discapacidad, encargada de aplicar las políticas y los programas que apunten a la integración de las personas con discapacidad. En el período comprendido entre marzo de 2012 y el 31 de enero de 2014, en colaboración con asociados del sector público y la sociedad civil, la Oficina procuró reforzar su capacidad institucional y la de las asociaciones que ejercen su labor en el ámbito de la discapacidad; facilitar a más personas con discapacidad el acceso a la educación y a la formación profesional, en contextos tanto ordinarios como especializados; mejorar el acceso de las personas con discapacidad a la protección social, el empleo y la actividad empresarial; promover la instalación de infraestructuras físicas accesibles para las personas con discapacidad; fomentar y reforzar el marco jurídico en favor de estas personas y facilitar a un mayor número de ellas el acceso a la atención médica y a servicios de rehabilitación. El Gobierno ha procedido a la ratificación de dos convenciones internacionales de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en materia de derechos de las personas con discapacidad.

26. Asimismo, entre 1983 y 2007 existió el Consejo Nacional para la Rehabilitación de las Personas con Discapacidad, que interrumpió su labor durante un tiempo. Un decreto presidencial publicado en octubre de 2013 renovó al nombramiento de los ocho miembros del Consejo por un mandato de dos años. La Ley de Integración de las Personas con Discapacidad, aprobada por el Parlamento el 13 de marzo de 2012, promulgada el 21 de mayo de 2012, obliga al Estado a adoptar medidas que faciliten la inclusión de las personas con discapacidad en la vida nacional.

27. Además, el Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional está elaborando un programa de educación especial para personas con discapacidad.

28. Se ha llevado a cabo una campaña para concienciar a la sociedad de los derechos y la capacidad de las personas con discapacidad. Se organizan talleres de formación destinados a jueces y estudiantes de la Escuela de Magistratura. El Gobierno ha reforzado a las asociaciones de personas con discapacidad y dirige una campaña para dar a conocer la necesidad de aplicar las normas de accesibilidad universal y de hacer efectivo el derecho al trabajo de las personas con discapacidad.

29. La Oficina del Secretario de Estado de Integración de las Personas con Discapacidad recibe a las personas con discapacidad que se consideran víctimas de la discriminación y les facilita información que les permita evaluar las opciones judiciales en cada caso. Cabe tener presente que, en estos momentos, la Oficina no dispone de los recursos necesarios para ofrecerles asistencia letrada.

30. La Ley de Integración de las Personas con Discapacidad, aprobada por el Parlamento el 13 de marzo de 2012 y promulgada el 21 de mayo de 2012, obliga al Estado a adoptar medidas que faciliten la inclusión de las personas con discapacidad en la vida nacional. Tras el primer Foro Gubernamental de Políticas Públicas Integradoras en Materia de Discapacidad, la Oficina del Primer Ministro publicó la Circular N° 15, que recuerda a los diferentes ministerios la urgencia de llevar a la práctica las prerrogativas previstas en dicha Ley.

31. Se ha traducido al criollo y al braille la Ley de Integración de las Personas con Discapacidad, con la colaboración de la OEA y el apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). También se ha editado una versión en formato audio. Se han distribuido 3.000 ejemplares en criollo y en francés por todo el país.

32. En atención a las exigencias de dicha Ley, se está preparando un proyecto de ley para poner en marcha un fondo de solidaridad nacional para la integración de las personas con discapacidad.

33. Se constituyó un comité *ad hoc* encargado de preparar un proyecto de decreto que contenga las normas de construcción según los principios de accesibilidad universal, en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones y la OEA. Ello dio lugar a la creación de un Comité Interministerial de Seguimiento en Materia de Discapacidad mediante decreto de 9 de enero de 2014. Este Comité Interministerial tiene por objeto garantizar la coordinación y la armonización de las políticas públicas en la materia con miras a facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la infraestructura física y a los servicios públicos.

34. Se está preparando un proyecto de armonización del Código del Trabajo de Haití con la Ley de Integración de las Personas con Discapacidad. Gracias al apoyo del Brasil y de Cuba, el Ministerio de Salud Pública y Población ha comenzado el proceso de establecimiento del Instituto Haitiano de Rehabilitación, que se inaugurará en 2014 para ofrecer servicios de rehabilitación a la población y participar en la formación de profesionales en rehabilitación.

35. En colaboración con la OEA, y con el apoyo financiero de la USAID, más de 500 funcionarios y jueces han recibido formación sobre la aplicación de la Ley de Integración de las Personas con Discapacidad, sobre el sistema de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad con arreglo a las convenciones de las Naciones Unidas y la OEA y sobre las políticas públicas en la materia. El Estado ha suscrito un acuerdo de colaboración con algunas instituciones privadas a fin de integrar un módulo sobre la accesibilidad universal en el programa de formación de los técnicos de la construcción.

36. El 17 de septiembre de 2013, la Oficina del Secretario de Estado de Integración de las Personas con Discapacidad organizó un salón de la ocupación, que reunió a profesionales con discapacidad y a posibles empleadores del sector privado, del sector público y de las organizaciones no gubernamentales. El salón fue organizado conjuntamente por la Oficina del Secretario de Estado de Integración de las Personas con Discapacidad, las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la fundación "J'aime Haïti", la Cámara Junior Internacional de Haití, la Cámara de Comercio e Industria de Haití, la Christian Blind Mission, y la USAID. Diez personas con discapacidad encontraron un puesto de trabajo *in situ* y, concluido el salón, varios empleadores públicos y privados estudiaban el perfil profesional de otras 67 personas.

37. Con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la organización AKSE/CARE, el Gobierno está preparando el informe inicial que la República de Haití presentará al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el primer trimestre de 2014.

38. Para promover los derechos de las personas con discapacidad, se ha puesto en marcha el programa "Kore Moun Andikape", que prevé subvenciones públicas para 25.000 personas con discapacidad. Este proyecto, que comenzó en el ejercicio 2012-2013, cuenta con unos 2.000 beneficiarios y debería verse reforzado por el Fondo de Asistencia Económica y Social durante el ejercicio 2013-2014. El objetivo consiste en apoyar otras medidas que apunten a dar más autonomía a las personas con discapacidad. En



este sentido, el Gobierno ha reiterado su compromiso de hacer de la inserción de las personas con discapacidad uno de los pilares de su política de justicia social.

39. En el marco de la Semana de la Discapacidad, a partir del 29 de noviembre, la Dependencia de Construcción de Viviendas y Edificios Públicos entregó las llaves de nuevas viviendas adaptadas a 50 personas con discapacidad, entre ellas algunos desplazados internos que aún vivían en los campamentos instalados tras el terremoto de 2010.

40. Haití no ha adoptado medidas específicas para eliminar la discriminación de personas lesbianas, gais y transgénero en vista de que no son víctimas de una persecución sistemática. No obstante, tras algunos actos homófobos aislados, los representantes de las organizaciones de personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) fueron recibidos por la Ministra de Derechos Humanos, quien les manifestó públicamente su solidaridad e instó a la sociedad haitiana a demostrar su tolerancia hacia ellos.

#### **Estado de excepción (art. 4)**

41. El 31 de octubre de 2012, el Gobierno declaró el estado de excepción en todo el territorio haitiano tras el paso del huracán Sandy, que había afectado a todo el país. Esta medida fue prorrogada durante un mes, es decir, del 5 de diciembre de 2012 al 5 de enero de 2013. El estado de excepción no suspendió ninguno de los derechos consagrados en el Pacto.

42. Las disposiciones de los artículos 278 y siguientes de la Constitución de Haití se ajustan a lo dispuesto en el artículo 4 del Pacto. En efecto, el estado de sitio se declara en la totalidad o una parte del territorio mediante acto del Presidente de la República que debe ser refrendado por el Primer Ministro y los demás ministros y que debe convocar con carácter inmediato a la Asamblea Nacional para que se pronuncie sobre la oportunidad de la medida.

43. El artículo 278-2 de la Constitución no precisa las garantías constitucionales que pueden suspender conjuntamente la Asamblea Nacional y el poder ejecutivo. Sin embargo, dado que Haití es parte en el Pacto, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 4 del Pacto en el caso de que se produzca dicha situación. En cuanto al período marcado por disturbios políticos en los años 2003 y 2004, a pesar de su gravedad, el Estado no suspendió nunca las garantías constitucionales.

44. Tras el paso del huracán Sandy, el 31 de octubre de 2012 el Gobierno de Haití declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional. Esta medida de excepción fue prorrogada durante un mes, es decir, del 5 de diciembre de 2012 al 5 de enero de 2013. El decreto no suspendió ningún derecho garantizado por el Pacto, sino que se limitó a simplificar los procedimientos administrativos necesarios para movilizar recursos financieros.

#### **Derecho a la vida (art. 6)**

45. Las ejecuciones extrajudiciales son delitos que condena el Gobierno de Haití. Cuando las autoridades del Estado tienen conocimiento de estos delitos, sus autores son puestos a disposición de la justicia para que comparezcan y sean juzgados según lo dispuesto en el Código Penal.

46. En la localidad de Croix-des-Bouquets, situada en el Departamento del Oeste, tres jóvenes habrían muerto por disparos de un policía, que fue detenido tras una orden de la fiscalía del tribunal de primera instancia competente; el expediente fue remitido al órgano de instrucción para que se tomaran las medidas judiciales del caso. Las instancias policiales

toman todas las medidas necesarias para prevenir las ejecuciones sumarias. De producirse una se abre una investigación administrativa y la policía toma las medidas legales del caso.

47. La población de Haití crece a una tasa anual del 1,5% a partir de 10,4 millones de habitantes en 2012, de los cuales 2,6 millones son mujeres en edad de procrear, según estimaciones del Instituto Haitiano de Estadísticas e Informática. Según cálculos de la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Banco Mundial, la mortalidad materna en Haití ha ido cayendo de 620 fallecimientos por cada 100.000 nacidos vivos en 1990 a 550 en 1995, 460 en 2000, 410 en 2005 y 350 en 2010, lo que representa un descenso del 43% en 20 años. El informe estadístico de 2013 publicado por el Ministerio de Salud Pública y Población muestra que, según los datos recopilados por el Sistema de Información de Salud, la proporción es de 157 madres fallecidas por cada 100.000 nacidos vivos inscritos.

48. El margen de error de las estimaciones de las Naciones Unidas con respecto a Haití en 2010 se sitúa entre 210 y 610 madres fallecidas por cada 100.000 nacidos vivos. Si bien este descenso es importante, sigue siendo insuficiente y, por ello, hay que redoblar los esfuerzos que, con el consentimiento de las distintas partes, han permitido mantener, durante estos últimos cinco años, esta tendencia a una mejor atención de la salud reproductiva.

49. En efecto, aunque se sigue considerando bajo, el porcentaje de partos que tienen lugar en centros de salud pasó del 25% en 2006 al 35,9% en 2012; el porcentaje de partos dirigidos por profesionales formados pasó del 26,1% en 2006 al 37,5% en 2012, mientras que la tasa de utilización de métodos anticonceptivos modernos por parte de mujeres (casadas) de 15 a 49 años pasó del 24,8% en 2006 al 31% en 2012. La tasa de mortalidad infantil en el año 2012 fue de 59 por cada 1.000 nacimientos vivos.

50. La tasa global de fecundidad es de 3,5 a escala nacional, mientras que el promedio de hijos deseados es de 2,0, lo que se traduce en un elevado nivel de necesidades desatendidas, sobre todo entre los jóvenes. La tasa de fecundidad de los adolescentes (15 a 19 años) representaba en 2006 el 8,4% de la fecundidad total de las mujeres en edad de procrear, mientras que esa cifra era en 2012 del 11,78%.

51. Estas mejoras puestas de manifiesto responden fundamentalmente a la labor realizada por el Gobierno para atender a las necesidades primarias de la población y cumplir los compromisos internacionales relacionados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La mejora de la oferta de servicios ha consistido en:

- Definir la salud materna como vía de entrada en el sistema de salud;
- Revisar y difundir las normas para atender las complicaciones en el parto;
- Impartir formación continua a las personas con cargos de responsabilidad;
- Ampliar los servicios obstétricos y neonatales de urgencia;
- Crear el Instituto Nacional de Formación de Comadronas;
- Ampliar la formación en el método madre canguro para atender a los recién nacidos;
- Ampliar los servicios de prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH;
- Aplicar una política para que jóvenes y adolescentes cobren conciencia de la salud reproductiva.

**Prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes  
(arts. 7 y 10)**

52. La Inspección General de la Policía Nacional de Haití recibió 22 denuncias de casos de abuso de autoridad, incluidos casos de tortura, entre enero y diciembre de 2013. Los policías implicados fueron interrogados y la Inspección General formuló las recomendaciones del caso que, en algunos casos, acarrearón incluso la remoción del cargo de los responsables.

53. El Estado haitiano ha iniciado una reforma del sistema judicial que afecta principalmente al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal. Varios grupos de trabajo ya habían elaborado proyectos y propuestas de ley a tal efecto. El 8 julio de 2013, el Presidente Michel Martelly estableció una comisión con objeto de elaborar propuestas de reforma y revisar las propuestas y los proyectos de ley ya elaborados. En estos momentos se está debatiendo la cuestión de incorporar en este proyecto la criminalización de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

54. Actualmente, la tortura, las penas y otros tratos delictivos inhumanos o degradantes son objeto de sanción. Concretamente, el Código Penal haitiano, en su artículo 293, establece la pena de trabajos forzados a perpetuidad para quienes cometan actos de tortura corporal contra una persona detenida o en prisión preventiva.

55. A fin de combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, el Gobierno ha adoptado diversas medidas y se han establecido varios mecanismos, concretamente:

- Se ha ultimado un proyecto de ley marco sobre la prevención, el castigo y la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, que será examinado por el Parlamento en su próximo período legislativo;
- Se ha implementado el segundo Plan Nacional para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas para el período 2012-2016;
- Periódicamente se celebran reuniones sectoriales estratégicas con miras a fortalecer el proceso de diálogo nacional destinado a combatir la violencia contra la mujer;
- El 7 de agosto de 2013, el Consejo de Ministros aprobó la convocatoria del Foro de Directores Generales para debatir, entre otros asuntos, la política gubernamental en materia de igualdad entre hombres y mujeres;
- Se ha ejecutado un proyecto de acogida de mujeres y niñas víctimas de violencia, que incluye la construcción de una casa de acogida para mujeres víctimas, en el Departamento del Oeste, más concretamente en el municipio de Gressier;
- El 27 de noviembre, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se inauguró la Oficina para Combatir la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, dirigida conjuntamente por el Ministerio de la Condición Femenina y los Derechos de la Mujer y la Policía Nacional de Haití.

56. En colaboración con ONU-Mujeres, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Gobierno ha aprobado una serie de disposiciones para reducir la violencia contra las mujeres y las niñas en tres campamentos de desplazados: Caradeux, el campo de golf de Pétion-Ville y Delmas 2.

57. Se han organizado actividades de sensibilización sobre la violencia destinadas a las personas alojadas en los campamentos. Se han instalado farolas para solventar la falta de iluminación que propiciaba los atentados.

58. Se han colocado tanques de agua en los campamentos para frenar los casos de abusos sexuales sufridos por niñas durante sus desplazamientos a los puntos de suministro de agua situados fuera de los campamentos.

59. Se ha prestado apoyo a la policía para mejorar la atención a las víctimas de violencia sexual. En este sentido, con ayuda de organizaciones cuya labor contribuye a combatir la violencia contra las mujeres, en las comisarías de policía se han impartido diversos cursos de formación a hombres y mujeres policías sobre la manera en que se debe atender a las mujeres víctimas de violencia. Asimismo, se acaba de formar a 450 mujeres para reforzar el Cuerpo de Policía.

60. Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Gobierno ha impartido asimismo una serie de cursos de formación a un grupo de policías que pasarán a ser los encargados de cuestiones de género en el seno de la Policía Nacional de Haití.

61. El artículo 2 del Decreto de 6 de julio de 2005 establece lo siguiente: "Quien haya cometido un delito de violación o sea culpable de perpetrar una agresión sexual o una tentativa de agresión sexual con violencia, con amenazas, por sorpresa o mediante presión psicológica contra una persona del mismo o de distinto sexo será sancionado con la pena de diez años de trabajos forzados".

62. Los castigos corporales están prohibidos y sancionados en Haití de conformidad con la Ley de 10 de septiembre de 2001, publicada el 10 de octubre de 2001 (*Le Moniteur* 2001, N° 80).

#### **Libertad y seguridad de la persona**

63. Los artículos 26-1 y siguiente de la Constitución haitiana establecen un procedimiento sumario para los detenidos de forma arbitraria: el *habeas corpus*. Varias de las disposiciones del Pacto se han tenido en cuenta en el proyecto de reforma del Código Penal, en particular las relativas a los crímenes de lesa humanidad y al genocidio. El nuevo proyecto de código penal incluirá una definición de estas dos infracciones y sus penas correspondientes.

64. El Gobierno ha nombrado a 17 jueces de menores entre 1997 y 2014. Actualmente, 13 de las 18 jurisdicciones de la República cuentan con jueces de menores.

65. El Ministerio de Asuntos Sociales, por conducto del Instituto de Bienestar Social e Investigación (IBESR), ha adoptado medidas para resolver determinados problemas a que se enfrentan los menores en conflicto con la ley al salir de prisión, entre ellas:

- El seguimiento de su expediente en colaboración con el tribunal de menores;
- Su reinserción en una familia o una institución tras salir de prisión.

66. Se han adoptado medidas para poner freno a la imposición sistemática de la pena de prisión preventiva a estos menores. Hace unos meses abrió sus puertas un centro especializado para menores en Delmas 3. Asimismo, en Delmas 33 (Departamento del Oeste) se construyó el Centro de Reinserción de Menores en Conflicto con la Ley, que fue inaugurado en mayo de 2011. En este Centro se realiza un seguimiento psicosocial de estos menores y se les imparte formación escolar. No obstante, la capacidad del Centro sigue siendo insuficiente si se tiene en cuenta el número de niños que se encuentran en dicha situación. En Cabaret (Departamento del Oeste) hay un centro similar, el Centro Haitiano de Reinserción de Menores en Conflicto con la Ley, que dispone de infraestructura y personal. Sin embargo, carece de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo su actividad.

67. Por lo general, el Gobierno ha adoptado medidas para separar a los menores de los adultos en los centros de prisión preventiva de todo el territorio. No obstante, por falta de recursos financieros, la prisión preventiva sigue siendo una medida muy extendida para manejar los casos de menores en conflicto con la ley. Entre sus actividades, el Gobierno ha hecho hincapié en el nombramiento y la formación de jueces de menores.

#### **Trato a las personas privadas de libertad (art. 10)**

68. Con objeto de reducir el hacinamiento en las cárceles, el Ministerio de Justicia ha creado comisiones para asuntos relacionados con la prisión preventiva. Estas comisiones, formadas por jueces, representantes del Gobierno y representantes de sectores de la sociedad civil, analizan los casos de las personas en prisión preventiva y los remiten a los jueces para que sean tramitados con rapidez. Esta labor ha contribuido a reducir notablemente la población reclusa.

69. El Gobierno ha iniciado las obras de renovación de algunas cárceles del país. En Jérémie, por ejemplo, la cárcel ha sido objeto de una renovación, que ha incluido un aumento de 90 m<sup>2</sup> de la superficie para reclusos y la construcción de un depósito de agua. En la cárcel de Les Cayes se ha construido una celda para menores y se han finalizado las obras de construcción de un nuevo pabellón para mujeres; asimismo, en Hinche, capital del Departamento del Centro, se está ejecutando un proyecto de ampliación de la cárcel.

70. En cuanto a la penitenciaría nacional, el Estado haitiano tiene intención de trasladarla a otra ubicación, en el momento oportuno, en el marco de la reconstrucción del área metropolitana.

#### **Eliminación de la esclavitud y la servidumbre (arts. 8 y 24)**

71. A fin de facilitar la aplicación de lo dispuesto en la Ley de Prohibición y Eliminación de Todas las Formas de Abusos, Violencia y Malos Tratos o Tratos Inhumanos contra los Niños, el Gobierno haitiano promulgó el 4 de junio de 2014 la Ley de Lucha contra la Trata de Personas, que establece el marco de referencia para la prevención, la protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los infractores.

72. Además, en noviembre de 2013 se publicó la nueva Ley de Adopción, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional. La Ley ofrece garantías sustantivas para la protección de los menores sin familia, en cuyo caso se recurriría a la adopción internacional con carácter subsidiario.

73. En la misma línea, el Gobierno ha iniciado el proceso de ratificación de dos Protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, el relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y el relativo a la participación de niños en los conflictos armados.

74. Con miras a dar a conocer a la población los efectos negativos de la práctica denominada comúnmente "*restavek*", se está elaborando una ley que incluirá una sección dedicada al trabajo infantil. Se ha iniciado una campaña de toma de conciencia contra la servidumbre infantil y se ha puesto en marcha un sistema de gestión y detección de estos casos, en particular de la servidumbre, la trata y el tráfico, a través de los números de emergencia 511 y 133 y la dirección de correo electrónico [enfantsvulnerables@gmail.com](mailto:enfantsvulnerables@gmail.com).

75. Asimismo, se ha establecido una mesa sectorial para luchar contra el trabajo forzado de niños y se ha creado una comisión tripartita formada por representantes del Estado, empresarios y sindicatos para que proponga soluciones a los problemas que plantea ese trabajo. En asuntos relacionados con el maltrato de niños, los casos son transferidos a la Brigada de Protección del Menor o a la Fiscalía para que se tomen medidas legales.

Además, el Gobierno presta apoyo a las organizaciones nacionales que luchan contra el trabajo forzado de niños, como la fundación Maurice Sixto.

76. El Gobierno ha puesto en marcha un dispositivo de familias de acogida estables para los niños que hayan sido víctimas de la trata cuando no quepa la posibilidad de que vuelvan con su familia de origen. Las normas mínimas para la atención a los niños vulnerables fueron refrendadas en noviembre de 2013. El Instituto de Bienestar Social (IBESR) ha extendido su labor a los diez Departamentos y ha reforzado su presencia junto a las fronteras (aumentando el número de agentes fronterizos).

77. Se están llevando a cabo actividades conjuntas con la República Dominicana para sacar a los niños haitianos de su situación de víctimas de la trata (trabajo doméstico, etc.), y a menudo se detiene a los traficantes. Asimismo, el Gobierno suele volver a reunir a los niños víctimas de la trata con sus familias.

78. Se han adoptado medidas para controlar los viajes de los menores. El 25 de julio de 2012 se firmó un protocolo de cooperación entre la Dirección de Inmigración y Emigración, la Brigada de Protección del Menor y el IBESR con objeto de llevar un control más estricto del traslado de menores a países extranjeros. Según lo dispuesto en ese protocolo, para que un niño pueda abandonar el territorio nacional es preciso contar con una autorización previa expedida por el IBESR. La Dirección de Inmigración y Emigración deberá ayudar al IBESR a verificar todos los documentos que permitan la entrada, la salida o el tránsito de cualquier menor y su acompañante, comprobando su conformidad y asegurándose de que los menores no acompañados de sus padres biológicos (padre o madre) estén provistos de una autorización de partida expedida por el IBESR.

#### **Prisión por deudas (art. 11)**

79. La prisión por deudas está prohibida en Haití de conformidad con el Código de Derecho Internacional Privado, también denominado Código de Bustamante, en que el país es parte. Todavía no existe ninguna ley de aplicación de este Código, y en ocasiones se ha constatado que los deudores califican de estafa el impago de una deuda para que el acreedor sea encarcelado. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública ha enviado circulares a todos los tribunales de primera instancia instándoles a que se mantengan alerta y recordándoles la obligación de aplicar lo dispuesto en el Código Bustamante para evitar cualquier caso de prisión por deudas.

#### **Libertad de circulación, derecho a la personalidad jurídica y a la vida privada (arts. 12, 13, 16 y 17)**

80. El Estado ha adoptado varias medidas con miras a encontrar soluciones duraderas para los desplazados que viven en los campamentos desde que acaeció el terremoto del 12 de enero de 2010. Entre ellas, cabe citar los programas gubernamentales de reasentamiento como el programa 16/6, ejecutado con el apoyo del PNUD, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que consiste en el cierre de 6 campamentos y la rehabilitación de 16 barrios. En el contexto de este programa, el Estado sigue tres vías de acción:

- La primera opción es que los desplazados busquen una vivienda de alquiler y se les conceda una subvención equivalente a un año de renta;
- La segunda es que se proporcione apoyo para la demolición de las viviendas con una marca roja hecha por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones tras el terremoto, es decir, las viviendas que se deben derribar. El apoyo cubre la retirada de los escombros y una ayuda por una cuantía equivalente a 6.000 dólares de los Estados Unidos para la reconstrucción de esas viviendas;

- La tercera es que se reparen las viviendas con una marca amarilla, es decir, las viviendas que se pueden reparar habida cuenta de los daños sufridos. Independientemente de la solución elegida, toda familia que decida abandonar los campamentos recibe un subsidio por reasentamiento de 20.000 gourdes.

81. Por la noche las autoridades comprueban qué familias viven realmente en el campamento y pueden acogerse a la ayuda, todo ello en presencia de un juez de paz y del alcalde del municipio. En el caso de las viviendas colectivas, se concede una aportación por familia. Si se trata de una casa con una estructura de base ampliable por pisos, la aportación por familia es más elevada. Por lo general, después de esta comprobación los beneficiarios tienen un plazo de 72 horas para mudarse.

82. Cabe mencionar que el Gobierno no lleva a cabo desalojos forzados ni los fomenta. No obstante, reconoce que, por iniciativa de particulares, se han dado casos de desalojos forzados, e incluso violentos, en algunos campamentos instalados en propiedades privadas. A fin de evitar que se repitan situaciones de esa índole, el Gobierno remitió al ministerio público la instrucción de que se suspendiera la ejecución de las decisiones de desalojar a los desplazados que viven en los campamentos.

83. Asimismo, cabe hacer referencia al programa 400/100, que consiste en construir 400 viviendas sociales en 100 barrios, ejecutado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, como medida para encontrar una solución permanente para los desplazados.

84. Se está implementando además un programa de construcción de 3.000 viviendas sociales, de las cuales ya se han terminado 1.280. La inauguración de la primera fase tuvo lugar el 16 de mayo de 2013, cuando se hizo entrega de las llaves de 120 viviendas construidas. Se prevé que las obras finalicen a principios de 2015. En estas construcciones se tienen en cuenta las infraestructuras sociales, así como los principios modernos de la vivienda, y las nuevas comunidades cuentan con una escuela básica, un centro de salud, una comisaría de policía y una estación de bomberos para proporcionar un servicio de proximidad a la población.

85. Las personas que hubieran perdido sus documentos de identidad a raíz del terremoto o que carecieran de ellos han tenido la posibilidad de obtenerlos gracias a las iniciativas emprendidas por el Ministerio de Justicia. El Ministerio remitió a funcionarios de gobierno, jueces de paz y funcionarios del Registro Civil la instrucción de que expidieran un segundo ejemplar a las personas desprovistas de partida de nacimiento una vez que estas hubieran presentado un acta notarial levantada por el tribunal de paz de su lugar de residencia. Además, los archivos nacionales establecieron equipos de emergencia que permitían a los grupos objetivo obtener un certificado de nacimiento. No obstante, en Haití el hecho de que alguien no pueda presentar su partida de nacimiento no lo convierte automáticamente en apátrida.

86. Debido a las dificultades económicas que atraviesa el país, muchos haitianos deciden emigrar al extranjero de forma irregular y, en ocasiones, son repatriados por la fuerza por las autoridades del país de llegada. El Gobierno haitiano, por conducto de la Oficina Nacional de Migración, les ayuda a reintegrarse proporcionándoles un conjunto mínimo de servicios que incluyen un alojamiento provisional, alimentación, ropa, medicamentos, atención psicosocial y dietas durante un período máximo de 48 horas para facilitar el regreso a su región de origen.

87. Asimismo, se presta especial atención a las personas con necesidades especiales (heridos, familias separadas, niños no acompañados, mujeres embarazadas o personas con discapacidad).

88. El IBESR y el Ministerio de la Condición Femenina y los Derechos de la Mujer colaboran en pro de la reintegración de los repatriados cuando se trata de niños no acompañados o mujeres en circunstancias difíciles.

#### **Independencia del poder judicial, derecho a un juicio imparcial (art. 14)**

89. Un sistema judicial independiente es uno de los requisitos para un juicio imparcial. Consciente de la importancia de este principio, el Gobierno haitiano ha adoptado medidas para hacerlo efectivo. Por ejemplo, se ha creado el Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ) y se ha elaborado un proyecto de reforma del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal.

90. Actualmente, un grupo de expertos haitianos, con el apoyo de varios miembros de la Sección de Justicia de la MINUSTAH, está revisando los dos Códigos con miras a modificarlos. Los expertos haitianos han sido nombrados por decreto del Presidente de la República.

91. El grupo habría avanzado más en su labor si no hubiera surgido el problema del lugar de reunión permanente. No obstante, gracias a la construcción de un local con material prefabricado, emplazado en las instalaciones del Ministerio de Justicia, es de esperar que dicha labor se lleve a cabo con más rapidez.

92. Además, la Escuela de Magistratura sigue impartiendo cursos de formación básica y continua a los magistrados. En cuanto al sistema de justicia móvil establecido por el Ministerio para los tribunales de paz, ha sido interrumpido debido a las dificultades financieras. No obstante, entre 2010 y 2012 se crearon 39 anexos de tribunales de paz en las delegaciones municipales.

93. El Gobierno haitiano ha procurado siempre que la población tuviera acceso a la justicia y, a esos efectos, ha creado cuatro Oficinas de Asistencia Jurídica en el Departamento del Oeste. El criollo, lengua hablada por la mayoría de la población haitiana, además de ser uno de los idiomas oficiales del país, se emplea en los tribunales. No obstante, son pocas las leyes que están traducidas a él.

94. Tras las numerosas denuncias recibidas en relación con el Programa de Escolarización Universal, Gratuita y Obligatoria, el Primer Ministro encomendó a la Dirección General de la Unidad de Lucha contra la Corrupción la tarea de investigar las escuelas beneficiarias de este programa.

95. Se investigaron 3.345 de las 5.945 escuelas (con un total de 610.481 alumnos) inscritas en la lista facilitada a la Unidad (el 56%); y 274 escuelas deberían ser sometidas a una segunda verificación. El 6 de junio de 2012 el Gobierno estableció el Comité Interinstitucional contra el Fraude Fiscal, el Contrabando, el Blanqueo de Activos y la Corrupción (presidido por la Dirección General de la Unidad) para aumentar los ingresos fiscales y aduaneros. Las campañas para combatir el contrabando llevadas a cabo en distintas regiones permitieron devolver a las arcas públicas 40.277.606,19 gourdes entre enero y diciembre de 2012, y entre enero y noviembre de 2013 se lograron recaudar 64.911.620 gourdes, lo que supone un incremento de 24.634.014 gourdes.

96. Entre los logros del Comité cabe citar:

- La formación de 125 agentes aduaneros nuevos;
- La elaboración de un plan de fortalecimiento de las estructuras de seguridad y control de todos los puertos abiertos al comercio exterior;
- El redespliegue de brigadas mixtas para combatir el contrabando en todo el territorio nacional, acompañado de un aumento del número de brigadistas de 12 a 18 en agosto de 2013 y de 18 a 36 desde octubre de 2013;



- La práctica de realizar inspecciones periódicas en los almacenes de mercancías de las tiendas y empresas sospechosas de practicar el contrabando;
- La construcción de vallas y barreras en la aduana de Belladère para combatir el contrabando y luchar contra la corrupción.

97. Con ayuda de la Unión Europea y el PNUD, el Gobierno haitiano prestará un apoyo constante a las estructuras permanentes del Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ) con objeto de reforzar su capacidad institucional para desempeñar su función de supervisar los juzgados y tribunales, entre otras cosas mediante:

- La aplicación de un proceso de diagnóstico de la capacidad del CSPJ y la elaboración de un plan de fomento de la capacidad;
- La dinamización de los mecanismos internos y externos de supervisión de los juzgados y tribunales, mediante un apoyo técnico al establecimiento de un proceso de certificación de los jueces y la implementación de sistemas de gestión de la información y programas de formación del personal del CSPJ y de los magistrados;
- El fomento de la capacidad de la Dirección Administrativa y Presupuestaria.

98. Dotado de una administración efectiva, el CSPJ constituirá un poder judicial plenamente independiente y capaz de asegurar la observancia de los principios indispensables para el buen funcionamiento de la administración de la justicia, a saber:

- El nombramiento de los magistrados por concurso de méritos;
- El respeto de la independencia de la magistratura y la inamovilidad de los jueces;
- El establecimiento de mecanismos disciplinarios, sancionadores y de supervisión de los magistrados;
- El seguimiento de la formación básica y continua de los magistrados.

99. En el marco de la profesionalización de la Policía Nacional de Haití, el Gobierno haitiano ha conferido a las Naciones Unidas el mandato de ayudarlo a comprobar los antecedentes de sus miembros. A lo largo de este proceso de investigación personal se han podido examinar 4.736 expedientes, a raíz de lo cual se ha recomendado la expulsión de 130 agentes del Cuerpo de Policía. Estos agentes disponen de una vía de recurso interno ante la Inspección General de la Policía, así como ante la Oficina del Defensor del Pueblo.

100. La Inspección General de la Policía ha sido dotada de recursos humanos, materiales y financieros para garantizar su funcionamiento eficaz e independiente. En lo que se refiere a los recursos humanos, en 2013 el personal de dicho organismo estaba formado por 131 agentes de policía —32 de ellos con rango de oficial— y 231 administrativos. Los recursos materiales facilitados a la Inspección General incluyen 30 vehículos, así como material didáctico, logístico e informático. Por último, este organismo fue dotado de un fondo de operaciones de 4.134.569,03 gourdes para el año 2013. Esta cantidad no incluye los demás recursos provenientes del presupuesto general de la Policía Nacional de Haití.

### **Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18)**

101. La libertad de culto está reconocida en Haití y consagrada en su legislación. Todas las confesiones religiosas pueden practicar libremente su culto en Haití siempre que no perturben el orden y la paz públicos. En lo que se refiere a su registro ante las autoridades públicas, las leyes en vigor describen los procedimientos que deben seguir los cultos católicos, reformados y del vudú. No obstante, existe un vacío jurídico en lo referente al registro de cultos que no pertenecen a ninguno de estos grupos religiosos. El Ministerio de Cultos está planteándose la posibilidad de presentar un anteproyecto de ley para subsanar ese vacío.

102. Se han adoptado diversas medidas para luchar contra la discriminación por motivos religiosos. Cada vez que un acto que atenta contra la libertad religiosa llega a conocimiento del Ministerio de Cultos, este organismo adopta las medidas oportunas. No obstante, algunos casos son competencia del poder judicial, como el de Jérémie, capital del Departamento de Grand'Anse, donde unos sacerdotes vudú fueron linchados por parte de la población tras ser acusados de haber lanzado un maleficio para propagar el cólera. Se iniciaron actuaciones penales y 5 personas fueron detenidas, 2 de las cuales fueron condenadas.

#### **Libertad de opinión y de expresión (art. 19)**

103. La libertad de expresión está garantizada y la ley vigente que regula la libertad de prensa es suficientemente liberal como para facilitar el disfrute efectivo de la libertad de expresión. No obstante, siempre que se denuncia algún caso de agresión contra periodistas ante las autoridades competentes, se investiga y se adoptan las medidas oportunas. Cabe citar, por ejemplo, el caso del periodista Wendy Phell, que fue objeto de agresiones graves a manos de un responsable de seguridad del alcalde del municipio de Thomonde (Departamento del Centro). El asunto se llevó ante el Ministerio del Interior y de Gobierno Local, que llevó a cabo una investigación y ordenó que se suspendiera temporalmente al alcalde de su cargo a la espera de la decisión del tribunal.

104. Han pasado 14 años desde que el periodista Jean Léopold Dominique y el vigilante de su emisora fueron asesinados junto al local de Radio Haïti Inter en Delmas. Hasta la fecha, la justicia haitiana, que se ha hecho cargo del asunto, no ha iniciado actuaciones penales al respecto, pero el caso no se ha archivado. Así pues, tras las diligencias instruidas por distintos jueces y en forma sucesiva, la causa contra los imputados fue transmitida al órgano juzgador en enero de 2014.

105. Los abogados de los imputados interpusieron un recurso de apelación contra dicho auto, y el Tribunal de Apelación de Puerto Príncipe abrió una instrucción. De esta manera, a instancias de la justicia haitiana, uno de los sospechosos, el Sr. Markington Philippe, que vivía en la Argentina, fue detenido y repatriado a Haïti para que respondiera a las preguntas de los jueces competentes en el asunto.

106. En lo tocante a los casos de Brignol Lindor, asesinado el 3 de diciembre de 2001, y de Jacques Roche, hallado muerto el 15 de julio de 2005, la justicia haitiana inició sendas actuaciones penales por las que se condenó a los culpables de esos delitos.

107. Según lo dispuesto en el artículo 313 del Código Penal haitiano, "[s]erá condenado por el delito de difamación quien, en reuniones o lugares públicos, en un acto auténtico y público, o en un escrito, imprimido o no, que haya sido expuesto, vendido o distribuido, haya imputado a cualquier persona hechos que atenten contra su honor y su reputación".

108. Según el artículo 316 del mismo Código, basado en el Decreto de 13 de junio de 1950 se impondrán al autor de este delito las siguientes penas:

"Si el hecho imputado puede ser sancionado con la pena de muerte o con trabajos forzados a perpetuidad, el culpable será condenado a una pena de cárcel de uno a tres años y a una multa de entre 300 y 1.500 gourdes. En cualquier caso, la pena de cárcel será de seis meses y un año y la multa de 100 a 500 gourdes. Código Penal, arts. 9 y 10, 26 y ss. y 36."

109. Las denuncias por difamación son poco frecuentes y suelen resolverse mediante conciliación entre las partes.

**Libertad de reunión y de asociación (arts. 21 y 22)**

110. En ocasiones se presentan denuncias contra agentes de la policía por haber hecho un uso excesivo de la fuerza para dispersar a manifestantes. Cuando se dan estos casos, la Inspección General de la Policía realiza las investigaciones correspondientes. El Estado haitiano asigna suma importancia a la protección de los defensores de los derechos humanos. Como muestra de ello, las autoridades competentes tramitan de manera diligente las solicitudes de adopción de medidas provisionales presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de organizaciones de defensa de los derechos humanos o de defensores de los derechos humanos.

111. En lo referente a los asesinatos de Daniel Dorsinvil y Girdy Larêche, el 8 de febrero de 2014, la investigación reveló que habían sido víctimas de un robo a mano armada que no guardaba relación alguna con sus actividades como defensores de los derechos humanos. En relación con este asunto fue detenido un sospechoso.

112. Por otro lado, se han adoptado importantes medidas para combatir la violencia sexual. Por ejemplo, la coordinadora de una organización que lucha contra la violencia sexual en Haití y asiste a las víctimas (KOFIV) fue víctima de una serie de actos de violencia e intimidación. Los hechos fueron denunciados los días 11 y 17 de septiembre de 2013 y 24 de febrero de 2014, y una sospechosa fue detenida por las autoridades.

113. En lo tocante a las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), el coordinador de una organización que defiende los derechos de esas personas (KOURAJ) fue objeto de intimidaciones y amenazas de muerte en julio de 2013. El 3 de diciembre se denunció el caso ante la Sala de Instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe. Se ha iniciado una investigación al respecto.

**Derechos del niño (art. 24)**

114. La República de Haití ratificó, en junio de 2012, el Convenio de La Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional, y ha revisado la Ley de Adopción de 1974. De este modo, en noviembre de 2013 entró en vigor una nueva Ley de Adopción por la que se prohibieron las adopciones individuales y privadas, que ya no son posibles en Haití.

115. Ahora, las solicitudes deben ser remitidas directamente al IBESR por las familias adoptivas o su representante legal en el caso de una adopción nacional y por un organismo acreditado para la adopción en el caso de una adopción internacional. Ninguna familia adoptiva u organismo acreditado está autorizada a elegir por sí mismos a quienes desean adoptar. Es competencia del Estado haitiano, por conducto del IBESR, tomar una decisión con respecto a la adoptabilidad de un niño y su apadrinamiento con anterioridad al procedimiento ante las autoridades judiciales.

116. Esa es una garantía necesaria en pro del interés superior del niño y del respeto de la cooperación establecida entre los Estados en materia de adopción internacional y de prevención del tráfico y la trata de niños.

**Participación en los asuntos públicos (art. 25)**

117. La Circular N° 2013-0001 relativa a la contratación fue aprobada por el Consejo de Ministros el 1 de diciembre de 2013 para recordar que la ley obliga a organizar un concurso público para la contratación de funcionarios. A menudo, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos paraliza el nombramiento de funcionarios por falta de pruebas de que se haya celebrado un concurso público.

**Difusión de información relativa al Pacto (art. 2)**

118. El Pacto se publicó en el *Boletín Oficial Le Moniteur* N° 2, de 7 de enero de 1991. Todavía no se ha traducido al criollo. Diversas organizaciones de la sociedad civil participaron en un taller para debatir el proyecto de informe inicial de Haití que se organizó en Puerto Príncipe en 2012. Durante el taller se crearon grupos temáticos para reflexionar sobre los distintos aspectos tratados en el informe. Acto seguido, los grupos comunicaron sus puntos de vista y sus opiniones a todos los asistentes en una sesión plenaria. Algunas de sus recomendaciones se tuvieron en cuenta a la hora de redactar la versión final.

**Conclusión**

119. La República de Haití se enfrenta a numerosas dificultades que limitan su capacidad de garantizar la plena aplicación de lo dispuesto en el Pacto en su territorio. No obstante, el Gobierno tiene la firme determinación de promover el estado de derecho, aún con los escasos recursos de que dispone.

---